

PLAZA PUBLICA

Jonguitud en San Luis Potosí

■ **Un gobernador sin presencia**

■ **Miguel Angel Granados Chapa**

■ En San Luis Potosí se va edificando un maximato estatal. Un gobernador debilitado, que llegó al poder simultáneamente con su ubicación en el nivel de la incompetencia —recuérdese el otrora famoso principio de Peter, según el cual una persona apta para un rango se revela lo contrario en el escalón superior—, está abriendo espacios que son rápidamente llenados por un personaje que se resigna mal a ejercer poder directamente. **2**

150 pesos

14-Ago-

1986-

VIENE DE LA 1

Hace menos de un año que el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios dejó la gubernatura potosina en manos del abogado Florencio Salazar Martínez. En ese lapso, el nuevo titular del Ejecutivo ha debido capear varias tormentas, y de ellas ha salido con el velamen despedazado: las elecciones municipales le dejaron un saldo adverso en el conservadurismo que confió en él; su equipo se ha desmadejado una y otra vez; genera conflictos con diversos factores de poder y de opinión en la entidad; no logra controlar órganos de gobierno tradicionalmente adscritos a la influencia de un gobernador, como el Congreso local, y, para colmo, su salud es precaria.

Por su parte Jonguitud no se contenta con la dirección real del sindicato magisterial, en donde le soplan de nuevo vientos de fonda. A la separación de un importante sector en Puebla, ahora ha seguido la rebeldía en Guanajuato; es muy poco probable que el profesor Alberto Miranda Castro, uno de los ahijados predilectos del Padrino potosino reciba en Baja California sur la *posición* que supone el SNTE que le corresponde en cuanto a gobiernos estatales. Por eso Jonguitud está resuelto a retornar a la política de San Luis, donde le inspiran las figuras de los generales Cedillo y Santos, que construyeron cacicazgos duraderos y fructíferos para sus detentadores.

El primero de agosto, Jonguitud asistió en la capital potosina al acto inaugural de la Universidad Popular del Centro. Se trata de una institución privada manejada por el clero, a la que dio vida un decreto dictado por el gobernador Jonguitud el 24 de septiembre de 1985, es decir 48 horas antes de que dejara el cargo. Es típico de los últimos días de un régimen servir para dejar sembrados elementos que propicien, llegado el caso, una nueva presencia de quienes se van formalmente de la función pública.

Esa circunstancia explicaría por qué se invitó a Jonguitud: al fin y al cabo a él se debe la creación de esa Universidad que empieza a funcionar justamente cuando cumple tres meses en huelga la institución pública correspondiente, en donde ha aflorado un viejo clima de violencia y corrupción que la hará poco deseable a los ojos de muchos solicitantes del servicio de educación superior. Para ellos, precisamente, la Universidad Popular del Centro —equivalente a otras con la engañosa denominación de "popular" que operan en Puebla y en Oaxaca como respuesta al talante progresista de las universidades públicas de esas entidades— abre sus cursos ahora, bajo la doble bendición de la Iglesia y de quien, por su carácter de dirigente del sindicato responsabilizado de la enseñanza, debiera tener presente el mandato constitucional sobre el laicismo. Es verdad que tal condición no abarca a las universidades sino sólo a la instrucción elemental, pero de todos modos hay incongruencia en el proceder del líder.

También hubo prepotencia en Jonguitud. Ese primero de agosto llegó en avión privado que sobrevoló la ciudad para hacerse notar, y se retrasó 45 minutos en llegar a la ceremonia inaugural, prolongado lapso en que debió aguardarlo, en el vestíbulo, el gobernador Salazar Martínez. Quizá esa fue una muestra de buena educación pero también puede ser interpretada como debilidad. Eso es lo más probable.